

Campaña XLIII: Si quieres la paz, rechaza la violencia

“En el corazón de los conflictos”

Guatemala: en busca de la verdad para convivir en paz

En diciembre, último mes del año, concluye también la campaña que MANOS UNIDAS ha dedicado a los *conflictos olvidados*, dentro del trienio 2001-2003 destinado a la consecución de la paz.

Guatemala, escenario durante décadas de actos de terror, represión, abusos y muerte, es el colofón de una campaña con la que MANOS UNIDAS se propone sensibilizar a la sociedad española acerca de esos conflictos largos y lejanos, que a pesar de sus devastadoras consecuencias, no ocupan portadas ni merecen grandes titulares.

Esta pequeña república centroamericana, que posee una superficie de 108.890 km², tiene una población cercana a los once millones y medio de habitantes, de los cuales más del 60 por ciento son indígenas pertenecientes a alguna de las 22 etnias mayas que pueblan el país.

El origen del conflicto civil que enfrentó a los guatemaltecos durante más de treinta años, estriba, precisamente, en la lucha de estos pueblos indígenas –y de los sectores más desfavorecidos: trabajadores rurales y mujeres- por salir de la situación de represión, discriminación y sometimiento que vienen padeciendo desde la época colonial.

Siglos de exclusión

Este segmento de la población guatemalteca ha sido, y aún hoy continúa siendo, víctima de la exclusión. Una exclusión que impide a millones de personas alcanzar un nivel de desarrollo humano suficiente para poder llevar una vida, cuanto menos, digna.

Desde que en 1524 las tropas españolas, al mando de Pedro de Alvarado –enviado de Hernán Cortés- penetraron en el territorio de este país centroamericano, los indígenas de Guatemala, comenzaron a sufrir abusos por parte de los gobernantes y las clases más pudientes.

Los indígenas, que fueron despojados de sus tierras y derechos, se vieron obligados a pagar altos tributos por sus escasas posesiones, además de ser utilizados para trabajar, sin recibir remuneración alguna, en la reparación o la creación de caminos, en los latifundio, etc.

Se inicia así una situación que, contrariamente a lo que muchos esperaban, se mantuvo e incluso se acrecentó con la llegada de la Independencia el 15 de septiembre de 1821.

Desde entonces y hasta nuestro días, este amplio espectro de la población de Guatemala se ha sido privado de los derechos más básicos. Desposeídos de las tierras, que explotaban en régimen comunal, y que fueron destinadas en gran parte a los cultivos masivos de café y banano, que con el tiempo quedaron en manos de países extranjeros y que en la actualidad son propiedad de los latifundistas nacionales-, se vieron obligados a abandonar sus posesiones e integrarse en las zonas selváticas, con el fin de poder garantizarse la subsistencia.

El acceso a la educación y a los servicios sanitarios también les fue negado. De este hecho deriva que en los albores del siglo XXI, de cada tres guatemaltecos adultos, uno sea analfabeto.

United Fruit Company y regímenes castrenses

La llegada masiva de intereses estadounidenses a Guatemala, a principios del siglo XX, puede considerarse el origen primero de un conflicto armado, que durante más de tres décadas enfrentó, en un desigual combate, a los indígenas con los representantes de los diferentes gobiernos, en su mayoría de carácter castrense y con los paramilitares.

Desde finales del siglo XIX y hasta finales de 1920 tiene lugar el llamado "cabrerismo": el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, quien permitió la entrada en Guatemala de capitales norteamericanos que se adueñaron de ferrocarriles, puertos, transportes marítimos, correos internacionales y grandes extensiones de terrenos donde, la entonces llamada *United Fruit Company* (UFCO), cultivaba y producía el banano.

En 1944 tuvo lugar la "Revolución de Octubre", que, tras derrocar al general Ubico Castañeda –en el poder desde 1931-, convoca elecciones en las que resulta ganador el reformista Juan José Arévalo.

Se inicia así una década de apertura política, económica y social en la que Arévalo y su sucesor Jacobo Arbenz, llevaron a cabo una serie de reformas, que incluyeron la expropiación de grandes extensiones de terreno que la *United Fruit Company* mantenía en reserva, medidas que fueron calificadas por los estadounidenses como "una amenaza a los intereses de Estados Unidos".

En junio de 1954, tras una campaña anticomunista desatada contra el gobierno de Arbenz, sucesor de Arévalo, este último fue derrocado y las tierras expropiadas a la UFCO, que se habían destinado a llevar a cabo la reforma agraria, volvieron a manos de la compañía frutícola norteamericana, que años después pasó a denominarse *United Brands*.

A partir de entonces, las convocatorias electorales fraudulentas de los años 1970, 1974, 1978 y 1982, permiten que se alternen en el poder los gobiernos castrenses.

En este clima de represión, en el que las garantías propias de un estado democrático eran nulas, nacieron los primeros movimientos revolucionarios armados. En 1962 surgieron las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR); en 1975 lo hizo el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y en 1979 la Organización del Pueblo en Armas (ORPA).

Década de los años sesenta: se inicia el enfrentamiento armado

La represión de los gobiernos militares no se hizo esperar y dio comienzo a un conflicto armado interno que habría de durar más de 30 años, hasta la firma del acuerdo de paz en diciembre de 1996.

Más de tres décadas de violencia orquestada desde el Estado dirigida fundamentalmente contra la población maya, los pobres, los excluidos y contra todo aquél que luchase por la justicia y la igualdad entre las clases.

En 1982, el número de víctimas –según diversos organismos vinculados a la defensa de los Derechos Humanos- alcanzaba las 150.000.

En este año, tras la unificación de todos los grupos revolucionarios en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), una asonada militar impuso en el poder al general Efraín Ríos Montt, quien lanzó una campaña contrainsurgente todavía más agresiva que la de sus predecesores. En tan solo un año, 15.000 guatemaltecos fueron asesinados, 70.000 huyeron a países vecinos y más de medio millón tuvieron que internarse a vivir en las montañas para escapar del ejército.

Triste es también que el actual presidente de la República de Guatemala, Alfonso Portillo, que ha incumplido gran parte de las promesas de su campaña electoral –de marcado carácter

populista- ha permitido el retorno a la actividad de gran número de militares implicados en graves violaciones de los Derechos Humanos, entre los que se encuentra el dictador Ríos Montt, quien ostenta el cargo de presidente de la Asamblea Legislativa.

En 1987 se inicia el largo proceso de búsqueda de una solución política para terminar con un enfrentamiento que duraba ya más de dos décadas. A pesar de ello durante los años sucesivos, continuaron las matanzas indiscriminadas, la violencia, la impunidad, la tortura y la militarización de la sociedad, por parte de los grupos hostiles que se oponían al acuerdo de paz.

A finales de 1996, el Gobierno del presidente Alvaro Arzú Irigoyen y la URNG, bajo los auspicios de Naciones Unidas y con el respaldo de la comunidad internacional, firmaron los Acuerdos de paz que ponían fin a un conflicto armado que causó más de 200.000 víctimas entre muertos y desaparecidos y dejó profundas huellas en las personas, las familias y la sociedad entera.

“La verdad nunca muere”

Guatemala desea saber. Conocer la verdad de su guerra y hacer partícipe de ella al resto del mundo. Indagar en los acontecimientos de su pasado reciente para poder así, restañar las heridas causadas por el largo y costoso enfrentamiento civil.

Pero la verdad muchas veces duele. Todavía hoy, hay guatemaltecos que no desean sacar a la luz su pasado, que para acallar la evidencia continúan utilizando la fuerza de las armas y la extorsión.

Así, diversas organizaciones de apoyo a los Derechos Humanos denuncian que en Guatemala en el siglo XXI sigue existiendo el miedo. Que hay fuerzas clandestinas muy poderosas que luchan por impedir que se conozca la verdadera magnitud del desigual combate que enfrentó a los más favorecidos y a las clases dirigentes, contra aquéllos que reivindicaban justicia e igualdad.

A pesar de ello, la sociedad guatemalteca quiere saber y con este fin se creó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), como parte del Acuerdo de Paz.

La misión de la CEH era “esclarecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca, vinculados con el enfrentamiento armado”. Fruto de las investigaciones es el estremecedor documento **“Guatemala: Memoria del Silencio”**, que enumera, detalla y profundiza en las atrocidades cometidas durante los años que duró el conflicto.

También la Iglesia de Guatemala se propuso indagar la verdad. En 1995 inicia el proyecto de la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), como aporte al proceso de paz y reconciliación y publicó un documento que sirvió de base para el trabajo anteriormente citado.

El promotor principal de este proyecto, coordinado desde la Oficina de Derechos Humanos del arzobispado de Guatemala (ODHA), fue Monseñor Juan Gerardi. La finalidad del estudio era que “la gente pudiera dar voz a sus vivencias de violencia y dolor (...) de conocer la verdad para dar paso a la posibilidad de la reconciliación”.

El 24 de abril de 1998, se presentó oficialmente el informe **“Guatemala: ¡Nunca más!”**. Dos días después, en la noche del 26 de abril, Monseñor Gerardi, fue asesinado.

El brutal asesinato sirvió para despertar a la sociedad civil guatemalteca de su letargo. Miles de ciudadanos se lanzaron a las calles para despedir a un hombre que nunca se creyó importante, pero que terminó siendo una parte fundamental para escribir la historia de su país.